



**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES**

RESOLUCIÓN NÚMERO 160813 DE 2025

(24 de noviembre 2025)

*"En cumplimiento del fallo de primera instancia proferido por el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CIÉNAGA - MAGDALENA**, que ordena dejar sin efectos las actuaciones surtidas en el proceso administrativo adelantado en contra del señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZADA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **12.634.341**"*

**LA DIRECTORA (E) DE OTRAS PRESTACIONES DE LA ADMINISTRADORA DE
LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD –
ADRES**

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos, 114 del Decreto Ley 019 de 2012 modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, en desarrollo el parágrafo del artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto 780 de 2016, numeral 1º y 5º del artículo 17 del Decreto 1429 de 2016 y el numeral 2º del artículo 6º de la Resolución 1012 de 2022 y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

- 1.1 Que, la Dirección de Otras Prestaciones, en el marco de la competencia conferida en el artículo 6 de la Resolución 1012 del 20 de mayo de 2022; modificado por la Resolución 0031114 del 28 de noviembre de 2023, mediante la **RESOLUCIÓN No. 111350 del 13 de septiembre de 2024**, se ordenó el cobro de las reclamaciones **1933539, 1933564, 1933923 y 1934071** en contra del señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZADA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **12.634.341**, por la suma total de **SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE. (\$7.550.369,27m/cte.)**, por concepto de gastos médico quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización de víctimas del accidente de tránsito ocurrido el día 10 de junio de 2018; en el cual se vio involucrado el automotor tipo motocicleta identificado con la placa **PRH25B**.
- 1.2 Que, mediante radicado **20241220207691** del 16 de octubre de 2024 se envía citación para notificación personal de la **RESOLUCIÓN No. 111350 del 13 de septiembre de 2024** a nombre de **DAVID FERNANDO CABANA LOZADA**, siendo esta devuelta por los **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 4»72** el 20 de noviembre de 2024 según guía **RA502798476CO**.
- 1.3 Que, teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar la notificación personal y atendiendo la prevalencia de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción que tiene el señor **PINEDA GALLON**, se procedió a realizar notificación del aludido título por AVISO a través de la página web de la **ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-ADRES** <https://www.adres.gov.co/notificaciones-administrativas> con fecha de fijación desde el 9 de mayo de 2025 hasta el 15 de mayo de 2025; acorde a los términos establecidos por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
- 1.4 Que, ejecutoriada la mencionada resolución, el Grupo de Cobro Coactivo de la Oficina Asesora Jurídica, en uso de sus facultades legales previstas en el artículo 112 de la Ley 6 de 1992, el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, el Libro V capítulo II título VIII del Estatuto Tributario Nacional, el numeral 4 del artículo 11 del decreto 1429 de 2016 y el artículo 16 de la Resolución 1012 de 2022, la Resolución 0007102 del 29 de junio de 2023 y demás normas concordantes; mediante la **RESOLUCIÓN 84480 del 15 de agosto de 2025** libró mandamiento de pago en contra del señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZADA**, por la suma de **IETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$7.435.277,00 m/cte.)**, más los intereses

Continuación de la Resolución: *"En cumplimiento del fallo de primera instancia proferido por el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CIÉNAGA - MAGDALENA**, que ordena dejar sin efectos las actuaciones surtidas en el proceso administrativo adelantado en contra del señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZADA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **12.634.341**"*

moratorios causados desde la fecha de exigibilidad del título ejecutivo hasta que se produzca el pago efectivo de la obligación, más los gastos en que incurra la administración y que se encuentren probados en el proceso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 836-1 del Estatuto Tributario Nacional.

- 1.5 Que, el antedicho mandamiento de pago fue notificado por AVISO en concordancia con lo establecido en el artículo 568 del Decreto 624 de 1989, modificado por el artículo 58 del Decreto 19 de 2012.
- 1.6 Que, el señor **JUAN ALBERTO PINEDA GALLÓN**, a través del radicado **20256305234532** del 24 de septiembre de 2025 solicita "(...) PRIMERO: Solicito se declare de oficio o a petición de parte la NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN de los actos administrativos "Resolución No. 111350 del 13/09/2024 y Resolución No. 84480 del 15/08/2025" emitidos por el ADRES en mí contra DAVID FERNANDO CABANA LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.634.341 de Ciénaga – Magdalena. SEGUNDO: Solicito la terminación del proceso coactivo adelantado en mí contra DAVID FERNANDO CABANA LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.634.341 de Ciénaga – Magdalena. TERCERO: Solicito el levantamiento inmediato de las medidas cautelares impuestas en mí contra DAVID FERNANDO CABANA LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.634.341 de Ciénaga – Magdalena. (...)".
- 1.7 Que, en atención a la solicitud realizada por parte del peticionario, se remite la correspondiente respuesta por parte de esta entidad, a los correos electrónicos cabanalozanodavid1978@gmail.com ; yerly_bautista18@hotmail.com con acuse de recibo del 16 de octubre de 2025.
- 1.8 Que, el aludido instaura acción de tutela ante el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE CIÉNAGA - MAGDALENA**, en contra de la **ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD- ADRES**, solicitando se declare la nulidad del cobro coactivo y las **RESOLUCIONES 111350 del 13 de septiembre de 2024 y 84480 del 15 de agosto de 2025**, así como levantar de forma inmediata la medida cautelar impuesta.
- 1.9 Que, el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE CIÉNAGA - MAGDALENA**, mediante fallo de tutela de primera instancia del 19 de noviembre de 2025, tuteló los derechos al debido proceso que le asisten al señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZANO** y ordeno dejar sin efectos la **RESOLUCIÓN 111350 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024** y levantar las medidas cautelares que se hubiesen impuesto en virtud de la actuación realizada.

2. DEL FALLO DE TUTELA

A fin de establecer si efectivamente existe una vulneración de los derechos fundamentales a favor del señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZANO**; el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE CIÉNAGA - MAGDALENA**, realizó un análisis de la solicitud realizada en los siguientes términos:

"(...) En el sub examine, para descender de inmediato a las particularidades del libelo genitor, encuentra el Despacho que el pedimento de amparo proviene del señor DAVID FERNANDO CABANA LOZANO, quien estima vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y mínimo vital, en virtud de las actuaciones del ADRES en el proceso de cobro coactivo seguido por el supuesto siniestro del vehículo con placas PRH25B, del cual afirma no es dueño. Afirmó el actor que su cuenta de ahorros esta embargada en virtud del referido proceso, del cual no ha sido notificado en debida forma.

A vista de los antecedentes surgen dos problemas jurídicos: (i) ¿la presente acción satisface el requisito de subsidiariedad? y, en caso afirmativo, (ii) ¿la entidad accionada amenaza o vulnera los derechos invocados por el hoy accionante DAVID FERNANDO CABANA LOZANO, en el proceso de cobro coactivo controvertido? Para resolver si en este caso se cumple el requisito de

Continuación de la Resolución: "En cumplimiento del fallo de primera instancia proferido por el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CIÉNAGA - MAGDALENA**, que ordena dejar sin efectos las actuaciones surtidas en el proceso administrativo adelantado en contra del señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZADA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **12.634.341**"

subsidiariedad debe tenerse presente que de conformidad con el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política "esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo para evitar un perjuicio irremediable". En el mismo sentido el artículo 6 numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 reza que la acción de tutela no procederá "cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante".

Sobre el particular la Corte Constitucional ha expuesto que en la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular y concreto, la Corte ha indicado que la excepcionalidad del recurso de amparo se torna especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo idóneo para atacarlos ya que, por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad, pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto administrativo se presume, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo que aquel se apartó, sin justificación alguna, del ordenamiento jurídico, debate que se debe adelantar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

"En la sentencia T-1008 de 2012, esta Corporación estableció que, por regla general, la acción de tutela procede de manera subsidiaria y, por lo tanto, no constituye un medio alternativo o facultativo que permita complementar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por la ley. Adicionalmente, la Corte señaló que no se puede abusar del amparo constitucional ni vaciar de competencia a la jurisdicción ordinaria, con el propósito de obtener un pronunciamiento más ágil y expedito, toda vez que éste no ha sido consagrado para reemplazar los medios judiciales dispuestos por el Legislador para tales fines" (negritas adrede).

La misma corporación ha respaldado en casos excepcionales el uso de este mecanismo constitucional bajo unas condiciones puntuales. En ese sentido dijo en la misma sentencia: "Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 Superior y 6º del Decreto 2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la protección de los derechos que se consideran vulnerados, existen algunas excepciones al principio de subsidiariedad que harían procedente la acción de tutela. La primera de ellas es que se compruebe que el mecanismo judicial ordinario diseñado por el Legislador no es idóneo ni eficaz para proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; y la segunda; que "siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela" (negritas adrede).

Teniendo en cuenta lo anterior, advierte el Despacho que en este caso se cumplen los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, puesto que es razonable el tiempo transcurrido entre la aducida vulneración de los derechos fundamentales y la presentación de esta acción de tutela. En relación con la subsidiariedad, si bien el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para solicitar la protección de los derechos invocados, se considera que en este caso se encuentra comprometido el mínimo vital del accionante y por tratarse de derechos fundamentales se considera procedente emitir decisión de fondo en el presente asunto.

Continuación de la Resolución: "En cumplimiento del fallo de primera instancia proferido por el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CIÉNAGA - MAGDALENA**, que ordena dejar sin efectos las actuaciones surtidas en el proceso administrativo adelantado en contra del señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZADA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **12.634.341**"

Es del caso indicar que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado sobre el mínimo vital como prerrogativa del Estado Social de Derecho. Al respecto, en la sentencia T-144 de 2021, señaló:

"Derecho al mínimo vital como prerrogativa del Estado Social de Derecho. Reiteración de jurisprudencia 59. Desde sus inicios, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que «el Estado Social de Derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance» [53]. Así, uno de los derechos más característicos de un Estado Social de Derecho es el mínimo vital.

0. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho al mínimo vital se deriva de los principios de Estado Social de derecho, dignidad humana y solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad [54].

61. Para la Corte, esta garantía constitucional adquiere gran relevancia en «situaciones humanas límites, relativas a la extrema pobreza y la indigencia, cuando frente a las necesidades más elementales y humanas, el Estado y la sociedad no responden de manera congruente»[55].

62. Así, desde la sentencia SU-995 de 1999, esta corporación reconoce el mínimo vital como un derecho fundamental ligado a la dignidad humana. En esa oportunidad, la Corte manifestó que «la idea de un mínimo de condiciones decorosas de vida (...), no va ligada sólo con una valoración numérica de las necesidades biológicas (...) para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de vida» [56].

63. Esta corporación ha señalado que el derecho al mínimo vital tiene dos dimensiones:

(i) La positiva, que presupone que el Estado y en algunas ocasiones los particulares, cuando se reúnen las condiciones establecidas, «están obligados a suministrar a la persona que se encuentra en una situación en la cual ella misma no se puede desempeñar autónomamente y que compromete las condiciones materiales de su existencia, las prestaciones necesarias e indispensables para sobrevivir dignamente y evitar su degradación o aniquilamiento como ser humano»[57].

(ii) La negativa, como un límite que no puede ser traspasado por el Estado, en materia de disposición de los recursos materiales que la persona necesita para llevar una existencia digna[58]. En palabras de la Corte:

«El Estado debe asegurar, en primer lugar, las condiciones para que las personas, de manera autónoma, puedan satisfacer sus requerimientos vitales y ello implica que, mientras no existan razones imperiosas, no puede el Estado restringir ese espacio de autonomía de manera que se comprometa esa posibilidad de las personas de asegurar por sí mismas sus medios de subsistencia»[59].

64. Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha determinado los siguientes criterios como subreglas ligadas al mínimo vital. A saber:

«(i) Es un derecho que tiene un carácter móvil y multidimensional que no depende exclusivamente del análisis cuantitativo de ingresos y egresos de la persona.

(ii) Como herramienta de movilidad social, el mínimo vital debe ser entendido de manera dual, ya que además de ser una garantía frente a la preservación de la vida digna, se convierte en una medida de la justa aspiración que tienen todos los ciudadanos de vivir en mejores condiciones y de manera más cómoda.

Continuación de la Resolución: "En cumplimiento del fallo de primera instancia proferido por el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CIÉNAGA - MAGDALENA**, que ordena dejar sin efectos las actuaciones surtidas en el proceso administrativo adelantado en contra del señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZADA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **12.634.341**"

(iii) En materia pensional, el mínimo vital no sólo resulta vulnerado por la falta de pago o por el retraso injustificado en la cancelación de las mesadas pensionales, sino también por el pago incompleto de la pensión, más cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional.[60].

65. Es conclusión, el mínimo vital es un derecho fundamental intrínsecamente ligado a la dignidad humana. En esa medida, su protección y garantía «constituye una precondition para el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales de la persona[61] y en una salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia, puesto que sin un ingreso adecuado a ese mínimo no es posible asumir los gastos más elementales, como los correspondientes a alimentación, salud, educación o vestuario»[62]."

Conforme al precedente jurisprudencial que antecede, el derecho al mínimo vital se deriva de los principios de Estado Social de derecho, dignidad humana y solidaridad, además, la Corte Constitucional indicó que el Estado debe asegurar, en primer lugar, las condiciones para que las personas, de manera autónoma, puedan satisfacer sus requerimientos vitales y ello implica que, mientras no existan razones imperiosas, no puede el Estado restringir ese espacio de autonomía de manera que se comprometa esa posibilidad de las personas de asegurar por sí mismas sus medios de subsistencia.

Revisado el caso se advirtió que en los hechos de la tutela el actor afirmó lo siguiente:

"PRIMERO: El día 05 de septiembre de 2025, intente retirar de mi Cuenta de Ahorros del BANCOBBVA, el salario que recibo como empleado, por lo que no fue posible ya que mi cuenta se encontraba embargada por el ADRES. SEGUNDO: El mismo día 05 de septiembre de 2025, eleve petición al ADRES con el fin de que me informaran los motivos, razones o circunstancias por los cuales mi cuenta de ahorros del BANCO BBVA se encuentra embargada, teniendo en cuenta que desconocía los motivos y que verificaran y corrigieran el mal entendido, ya que me estaban ocasionando problemas económicos, mi familia, mi salud y todas las obligaciones que debo cubrir de mi salario."

De lo antes transcrito se evidencia que conforme al actor fue embargada su cuenta de ahorro y no pudo retirar el salario que recibe como empleado, por tanto, es claro que se encuentra comprometido el salario del aquí tutelante, circunstancia que implica una inminente amenaza a su mínimo vital, el cual como antes se dijo, es un derecho fundamental que se encuentra íntimamente ligado a la dignidad humana.

Al respecto debe decirse que el Banco BBVA admitió que fue notificado de la medida cautelar ordenada por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, en contra del accionante, hasta por la suma de \$ 14.870.554 pesos, afirmando que el Banco registró la medida sobre la cuenta de ahorros con contrato terminada en 7762, en titularidad del actor, la goza del beneficio de inembargabilidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 837-1 del Estatuto Tributario, razón por la cual a la fecha no se ha cobrado o retenido suma alguna de dinero.

En dicha respuesta Banco BBVA admite haber registrado la medida afirmando que hasta la fecha no ha cobrado o retenido alguna suma de dinero, sin embargo, el accionante afirmó en el escrito de tutela que no puede retirar su salario, por tanto, se infiere que si esta presentando inconvenientes para retirar el dinero de su cuenta de ahorros, circunstancia que conlleva a una afectación de su mínimo vital.

Teniendo en cuenta que en este caso se está afectando el mínimo vital del accionante y consecuentemente se puede llegar a comprometer la dignidad del accionante, considera el Despacho que por encontrarse involucrados derechos fundamentales se cumple el requisito de subsidiariedad y se procederá a resolver de fondo el asunto.

Continuación de la Resolución: "En cumplimiento del fallo de primera instancia proferido por el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CIÉNAGA - MAGDALENA**, que ordena dejar sin efectos las actuaciones surtidas en el proceso administrativo adelantado en contra del señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZADA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **12.634.341**"

Para resolver de fondo el asunto es menester traer a colación que conforme al accionante la entidad accionada adelantó un proceso de cobro coactivo en su contra por la suma de SIETE MILLONESQUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$7.550.369, 27), por presuntos gastos médicos que nunca tuvo, pues no tiene nada que ver con el supuesto siniestro ni mucho menos es dueño del vehículo de placa PRH25B.

Señaló que desconoce los actos administrativos "Resolución No. 111350 del 13/09/2024 y Resolución No. 84480 del 15/08/2025" emitidos por el ADRES en su contra, pues nunca fue notificado en debida forma de dichas actuaciones viéndose vulnerado su derecho a la defensa y contradicción; afirmó que la supuesta dirección que tiene el ADRES no es su lugar de domicilio, porque está domiciliado en la Carrera 30 # 18c-173 de Ciénaga - Magdalena y no en la calle 19N 11-64 de Ciénaga - Magdalena.

Como prueba la parte actora allegó respuesta de la entidad accionada adiada 9 de septiembre de 2025, en la cual indicó lo siguiente (ff.10 a 16, documento electrónico #01): "En atención a la comunicación identificada con los radicados internos de la referencia, en la cual indica: "El motivo de este correo es con el fin de informar a ustedes que desconozco el motivo, razón o la circunstancias por la cual me están embargando ya que no tengo deudas con esta entidad, y me doy por enterado el día de hoy 05/09/2025 en la entidad financiera BBVA que tengo un embargo por esta entidad a mi cuenta y no se los motivos ni las razones, les pido y verifiquen, corrijan este mal entendido ya que me está ocasionando problemas en el trabajo, mi familia y mi salud..

Por lo anterior, esta oficina procede a otorga respuesta en los siguientes términos:

Por principio de inmediatez, cuando se produce un accidente de tránsito por vehículo automotor carente de SOAT, el Estado a través del entonces FOSYGA hoy ADRES en cumplimiento de la obligación constitucional de garantizar la vida y salud de sus ciudadanos, asume los gastos por los servicios médicos prestados a la víctima de accidente de tránsito, hasta los montos establecidos en el Decreto 056 compilado en el Decreto 780 de 2016, y procede al cobro de los mismos en contra del propietario del vehículo que incumplió su obligación de adquirir el seguro obligatorio SOAT.

Por lo anterior, la actuación administrativa de la ADRES surge únicamente con ocasión de los daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, como consecuencia del incumplimiento de la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, y al dirigir el cobro contra quien para la fecha de dicho evento figuraba ante el Estado como propietario del vehículo que causó las lesiones, se hace referencia a la omisión de un deber legal atribuida a quien permita la circulación de un vehículo que estando a su nombre, no cuente con una póliza de seguro obligatorio - SOAT, legal y vigente al momento de un accidente de tránsito.

El día 10/06/2018 el vehículo de placas PRH25B, se vio involucrado en un accidente de tránsito, lo que género que la ADRES reconociera y pagara las reclamaciones que se relaciona en el estado de cuenta líneas abajo relacionado, por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS CUSRENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$5.543.349,00); por la atención médica brindada a la víctima del siniestro en mención



HOJA No. 7 de 12

ADRES

En cuanto al grado de responsabilidad, es oportuno indicar que, al ordenarse el cobro, no se deriva una carga objetiva, civil o penal, por el contrario, al decir que la obligación recae sobre quien figura ante el Estado como propietario del automotor, se refiere a la responsabilidad administrativa atribuida a quien, incumpliendo su deber legal, permita la circulación de un vehículo que estando a su nombre, no cuente con una póliza SOAT legal y vigente al momento de un accidente de tránsito.

Continuación de la Resolución: "En cumplimiento del fallo de primera instancia proferido por el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CIÉNAGA - MAGDALENA**, que ordena dejar sin efectos las actuaciones surtidas en el proceso administrativo adelantado en contra del señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZADA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **12.634.341**"

De acuerdo con la información suministrada y los soportes documentales remitidos por la entidad prestadora del servicio de salud para el momento del siniestro.

Por lo anterior, la Oficina Asesora Jurídica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES, en el marco de la competencia conferida en el artículo 16 de la Resolución No. 16571 del 4 de junio de 2019, mediante la Resolución No. 111350 del 13/09/2024 ordenó el cobro al señor DAVID FERNANDO CABANA LOZADA por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$7.550.369,27); valor indexado al mes de AGOSTO de 2024 frente a las reclamaciones No 11393701, 11394241, 11433443 y 11464830 más los intereses que se causen a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo y hasta la fecha de su cancelación derivados del pago de los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, según la reclamación reconocida y pagada por la NACIÓN – FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA – FOSYGA su firmeza y hasta la fecha de pago, con ocasión a la reclamación generada por el accidente de tránsito ocurrido el día 10/06/2018 en el que se vio involucrado el vehículo de placa PRH25B que no contaba con la Póliza de Seguro Obligatorio SOAT legal y vigente.

La Resolución No 111350 del 13/09/2024 fue legalmente notificado por aviso, el día 16/05/2025 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


Espirado el término de traslado de que trata el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el deudor no ejerció su derecho de contradicción con la impugnación del acto, por la cual, Resolución No 111350 del 13/09/2024, cobró ejecutoria el día 3/06/2025 conforme con lo preceptuado en el numeral tercero (3º) del artículo 87, ib.

Ahora bien, la Oficina Asesora Jurídica en uso de sus facultades legales previstas en artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, los artículos del 98 al 101 de la Ley 1437 del 2011, el Libro V capítulo II título VIII del Estatuto Tributario Nacional, numeral 4º del artículo 11 del Decreto 1429 de 2016 y el artículo 16 de la Resolución 16571 de 2019 y demás normas concordantes, mediante Resolución No. 84480 del 15/08/2025, libró mandamiento de pago contra el señor DAVID FERNANDO CABANA LOZADA por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$7.550.369,27); valor indexado al mes de AGOSTO de 2024 más los intereses moratorios causados desde la fecha de exigibilidad del título ejecutivo hasta que se produzca el pago efectivo de la obligación, más los gastos en que incurra la administración y que se encuentren probados en el proceso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 836-1 del Estatuto Tributario Nacional. Acto administrativo que se encuentra en proceso de notificación, por ende, se invita al peticionario, para que autorice la notificación electrónica de la resolución en comento, para tal efecto, deberá allegar autorización expresa suscrita por la interesada, en el que informe el correo electrónico al cual se debe remitir copia de la resolución.

La autorización se debe enviar al correo correspondencia1@adres.gov.co La Oficina Asesora Jurídica, en aplicación de los artículos 825-1, 837, 837-1, 838, 839, 839-1 y 839-2 del Estatuto Tributario Nacional, a través del mandamiento de pago referido, decretó el embargo y retención de los dineros depositados en las cuentas de ahorros, corrientes, CDTs y demás productos financieros de los que sea titular el obligado en las entidades financieras con funcionamiento a nivel Nacional, limitándose la medida al doble del valor registrado en el mandamiento de pago, esto es, CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$14.870.554,00), de acuerdo con el artículo 838 del Estatuto Tributario en cumplimiento de la orden emanada, se libraron los oficios de embargo respectivos (...)"

Continuación de la Resolución: "En cumplimiento del fallo de primera instancia proferido por el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CIÉNAGA - MAGDALENA**, que ordena dejar sin efectos las actuaciones surtidas en el proceso administrativo adelantado en contra del señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZADA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **12.634.341**"

De la respuesta se advierte que el ADRES informó lo siguiente: (i) el día 10/06/2018, el vehículo de placas PRH25B se vio involucrado en un accidente de tránsito, lo que generó que ADRES reconociera y pagara las reclamaciones por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS CUSRENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$5.543.349,00), por la atención médica brindada a la víctima del siniestro en mención; (ii) la actuación administrativa se adelanta en contra del aquí actor en calidad de propietario del vehículo de placa PRH25B a la fecha del accidente, de acuerdo con la información suministrada por la entidad prestadora del servicio de salud – Polifracturas Cienaga I.P.S SAS nit 900.873.344- 9; (iii) quien figura e ante el Estado como propietario de un vehículo, es la persona responsable de cumplir con las obligaciones que se deriven de tal derecho (iv) la Oficina Asesora Jurídica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud– ADRES, en el marco de la competencia conferida en el artículo 16 de la Resolución No. 16571 del 4 de junio de 2019, mediante la Resolución No. 111350 del 13/09/2024 ordenó el cobro al señor DAVID FERNANDO CABANA LOZADA por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$7.550.369,27); (v) la Resolución No 111350 del 13/09/2024 fue legalmente notificada por aviso el día 16/05/2025, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; (vi) el deudor no ejerció su derecho de contradicción con la impugnación del acto, por la cual, Resolución No 111350 del 13/09/2024, cobró ejecutoria el día 3/06/2025 conforme con lo preceptuado en el numeral tercero (3º) del artículo 87, ib. Analizada esa respuesta se observa que ADRES inició actuación de cobro contra el señor DAVID FERNANDO CABANA LOZANO, en calidad propietario del vehículo de placa PRH25B, sin embargo, el actor afirmó no ser el propietario y aportó como prueba de ello consulta vehicular realizada en el Registró Único Nacional de Tránsito – RUNT, adiaada 22 de septiembre de 2025, en la que se observan las siguientes anotaciones:



REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CONSULTA VEHICULAR

Página 1 de 3

Histórico vehicular generado con la solicitud No. 2101324

Identificación : PRH25B

Expedido el 22 de septiembre de 2025 a las 6:50:04 p. m.

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

DATOS LICENCIA DE TRÁNSITO					
Nro. Licencia de tránsito	0003953531		Autoridad de tránsito	INST DPTAL TRT TITO MAGDALENA/ARACATACA	
Fecha Matricula	2010-04-13 13:22:42		Estado Licencia	ACTIVO	

CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO					
Nro. Placa	PRH25B		Nro. Motor	HA12EB89H05324	
Nro. Serie			Nro. Chasis	HA12EB89H05324	
Nro. VIN	NO REGISTRA		Marca	HONDA	
Linea	SPLENDOR		Modelo	2009	
Carroceria	SIN CARROCERIA		Color	NEGRO	
Clase	MOTOCICLETA		Servicio	PARTICULAR	
Cilindraje	97		Tipo de Combustible	GASOLINA	
Importado	SI		Estado del vehiculo	ACTIVO	
Radio Acción	NO APLICA		Modalidad Servicio	PASAJEROS	
Nivel Servicio	NO APLICA				
Regrabación motor	NO		No. Regrabación motor	NO APLICA	
Regrabación chasis	NO		No. Regrabación chasis	NO APLICA	
Regrabación serie	NO		No. Regrabación serie	NO APLICA	
Regrabación VIN	NO		No. Regrabación VIN	NO APLICA	
Tiene gravamen	NO	Vehículo rematado	NO	Tiene medidas cautelares	NO
Revisión Técnico-Mecánica vigente	SI	Tiene Seguro Obligatorio Vigente		SI	
Tiene Póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual					NO

Continuación de la Resolución: "En cumplimiento del fallo de primera instancia proferido por el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CIÉNAGA - MAGDALENA**, que ordena dejar sin efectos las actuaciones surtidas en el proceso administrativo adelantado en contra del señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZADA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **12.634.341**"

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS				
Tipo Documento	Nro. Documento	Nombres	Fecha Inicio	Fecha Fin
C.C.	26708354	OLIVIA MARIA MELENDEZ	30/12/2008	ACTUAL



REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CONSULTA VEHICULAR

Página 3 de 3

Histórico vehicular generado con la solicitud No. 2101324

Identificación : PRH25B

Expedido el 22 de septiembre de 2025 a las 6:50:04 p. m.

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LISTA DE ACCIDENTES REGISTRADOS	
El vehículo no tiene reportado ningún accidente	

Conforme a la consulta del RUNT se evidencia que el aquí accionante no es ni ha sido el propietario del vehículo de placa PRH25B, dilucidándose que ADRES inició la actuación administrativa basándose únicamente en la información "suministrada por la entidad prestadora del servicio de salud – Polifracturas Cienaga I.P.S SAS nit 900.873.344-9", sin constatar si efectivamente el señor David Fernando Cabana Lozano era el propietario del referido vehículo.

Teniendo en cuenta que ADRES inició la actuación de cobro contra el aquí actor basándose erróneamente en que este ostentaba la calidad de propietario del vehículo de placa PRH25B, es claro para el despacho que existió una indebida motivación en la Resolución No. 111350 del 13/09/2024, a través de la cual, la Oficina Asesora Jurídica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud– ADRES "ordenó el cobro al señor DAVID FERNANDO CABANA LOZADA por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$7.550.369,27); valor indexado al mes de AGOSTO de 2024 frente a las reclamaciones No 11393701, 11394241, 11433443 y 11464830 más los intereses que se causen a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo y hasta la fecha de su cancelación derivados del pago de los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, según la reclamación reconocida y pagada por la NACIÓN – FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA – FOSYGA su firmeza y hasta la fecha de pago, con ocasión a la reclamación generada por el accidente de tránsito ocurrido el día 10/06/2018 en el que se vio involucrado el vehículo de placa PRH25B que no contaba con la Póliza de Seguro Obligatorio- SOAT legal y vigente." (f.5 documento electrónico #06).

Obsérvese que el ADRES indicó expresamente que ordenó el cobro al señor David Fernando Cabana en virtud del accidente de tránsito ocurrido el día 10/06/2018 en el que se vio involucrado el vehículo de placa PRH25B, siendo que el actor afirmó y acreditó no ser el propietario de dicho vehículo.

Sumado a lo anterior, revisada la respuesta del ADRES el despacho no avizora que se hubiese notificado en debida forma al actor el inicio de la actuación de cobro, pues dicha entidad se limitó a informar que notificó la Resolución No 111350 del 13/09/2024, a través de aviso del día 16/05/2025, más no aportó las respectivas pruebas para acreditar la imposibilidad de efectuar la notificación personal y tampoco acreditó haber realizado la notificación por aviso, es decir, no acreditó haber surtido la notificación conforme al trámite contemplado en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En tal virtud, como quiera que la Resolución No. 111350 del 13/09/2024, presenta una indebida motivación, es claro para el Despacho que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, vulneró el derecho fundamental al debido proceso del actor. Por lo tanto, se concederá el amparo tutelar deprecado y se ordenará al ADRES que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, deje sin efectos la actuación administrativa de cobro coactivo adelantada contra DAVID FERNANDO CABANA LOZANO, a partir

Continuación de la Resolución: "En cumplimiento del fallo de primera instancia proferido por el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CIÉNAGA - MAGDALENA**, que ordena dejar sin efectos las actuaciones surtidas en el proceso administrativo adelantado en contra del señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZADA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **12.634.341**"

de la Resolución No 111350 del 13/09/2024, inclusive, debiendo levantar las medidas cautelares que se hubiesen impuesto en virtud de dicha actuación. Además, se abstendrá de ejercer acción de cobro alguna o adelantar medida cautelar en contra del accionante, hasta que cuente con acto administrativo en firme que dé lugar a ello.(...)

Una vez realizado el correspondiente análisis concluyó que, se tutelaré el Derecho al Debido Proceso a favor del señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZANO** y se dejarán sin valor ni efecto la **RESOLUCIÓN No. 111350 del 13 de septiembre de 2024** de conformidad con lo expuesto en las consideraciones del referido fallo.

3. CONSIDERACIONES DE ESTA DIRECCIÓN

En atención a la presentación de la documental presentada por el petitionario mediante el cual desvirtúa la propiedad del vehículo de placa **PRH25B** para el día 10 de junio de 2018 fecha del accidente de tránsito, esta dirección procede a dar cumplimiento a lo ordenado por el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE CIÉNAGA-MAGDALENA** en el fallo de Tutela de Primera Instancia del 19 de noviembre de 2025:

"(...)PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso de DAVID FERNANDO CABANA LOZANO.

SEGUNDO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, deje sin efectos la actuación administrativa de cobro coactivo adelantada contra DAVID FERNANDO CABANA LOZANO, a partir de la Resolución No 111350 del 13/09/2024, inclusive, debiendo levantar las medidas cautelares que se hubiesen impuesto en virtud de dicha actuación. Además, se abstendrá de ejercer acción de cobro alguna o adelantar medida cautelar en contra del accionante, hasta que cuente con acto administrativo en firme que dé lugar a ello.

TERCERO: NOTIFICAR este fallo de tutela a las partes por el medio más eficaz informándoles que de conformidad al artículo 31 del Decreto 2591 cuentan con tres (3) días a partir del recibo de la notificación para impugnar la decisión.

CUARTO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado el presente fallo.(...)"

Lo anterior, toda vez que petente allego ante el mencionado Juzgado el respectivo **REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO CONSULTA VEHÍCULAR** emitido por el **REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO - RUNT**, en el cual se evidencia que el señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZANO** no era propietario del vehículo de placa **PRH25B**.

En virtud de lo anteriormente expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN No. 111350 del 13 de septiembre de 2024, mediante la cual se impuso una obligación de pagar una suma líquida de dinero con fundamento en el derecho a repetir que le asiste a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES por concepto de las indemnizaciones efectuadas y/o los servicios de salud brindados a las víctimas del accidente de tránsito que involucran a vehículos no asegurados con póliza SOAT legal y vigente contra el señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZADA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **12.634.341** con fundamento en el fallo de Tutela de Primera Instancia del 19 de noviembre de 2025 proferido por **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE CIÉNAGA-MAGDALENA**.

Continuación de la Resolución: *"En cumplimiento del fallo de primera instancia proferido por el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CIÉNAGA - MAGDALENA**, que ordena dejar sin efectos las actuaciones surtidas en el proceso administrativo adelantado en contra del señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZADA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **12.634.341**"*

ARTÍCULO SEGUNDO. COMUNICAR la presente decisión a la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud y a la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la ADRES, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente decisión a la Oficina Asesora Jurídica, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR el contenido de la presente resolución al señor **DAVID FERNANDO CABANA LOZADA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **12.634.341**, en la dirección establecida para tal fin, conforme lo establece los artículos 56, 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

Destinatario	Dirección física y/o electrónica	Ciudad
DAVID FERNANDO CABANA LOZADA	cabanalozanodavid1978@gmail.com ¹	N/A

ARTÍCULO QUINTO. ADVERTIR que contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C., a los (24) días del mes de noviembre de 2025.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Firmado Digitalmente por
Yasmín Escamilla B.
Directora (E) de Otras Prestaciones

YASMÍN ESCAMILLA B.
Directora (E) de Otras Prestaciones

Elaboró: Estefania Santofimio S.- Contratista
Revisó: Rafael Enrique Roa – Abogado
Expediente: CC DAVID FERNANDO CABANA LOZANO-12634341
Anexos: Sin anexos

¹ Autorización 20256304824062